

las fuerzas militares en Colombia: de sus orígenes al Frente Nacional

Adolfo León Atehortúa Cruz

Profesor del Departamento de Historia,
Universidad del Valle y de la Maestría en Estudios
Políticos, Universidad Javeriana.

La obra de Gabriel García Márquez ha sido generalmente asumida como el espejo fiel, realista y mágico del acontecer colombiano iluminado por su historia. La primera frase de su novela cumbre, *Cien años de Soledad*, es uno de los más claros ejemplos: «Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo». Allí aparecen, de manera diáfana, dos elementos claves para el conocimiento e interpretación de la realidad colombiana: los hombres en armas, representados por el coronel Aureliano Buendía y el pelotón de fusilamiento, y la historia, evocada en los recuerdos de un pasado en donde la trama tuvo comienzo.

El presente ensayo intenta realizar un ejercicio de aproximación a tales elementos: observar a los hombres en armas y uniforme a través de su propia historia y de acuerdo con el papel por ellos asumido en el transcurso de las violencias en Colombia. Pero, obviamente, no será posible agotar todas las perspectivas que un estudio de magnitud implica. Con la brevedad y síntesis que la publicación exige, tan sólo rastrearemos algunas hipótesis iniciales al deseado estilo de Bernard Lepetit: «con la ambición de tomar, sobre lo vivo, un giro crítico»¹. En materia cronológica, además, sólo se abarcará el origen de las Fuerzas Armadas, su evolución en la

1. En relación con la obra de Bernard Lepetit y el diálogo entre «Le sociologue et l'historien», obsérvese: *Annales*, n° 3, mai-juin 1996. Paris: EHESS, 1996.

primera mitad del siglo XX, y algunas inquietudes iniciales con respecto al periodo conocido bajo el nombre de Frente Nacional en Colombia. En concreto, el objetivo fundamental persigue caracterizar el poder militar en Colombia. Es decir, explorar la envergadura real de su autonomía, la construcción o no de un proyecto político propio en el cuerpo castrense; el nivel de profesionalización de las Fuerzas Armadas, y la tipología del control ejercido sobre el orden interno. La dirección del estudio posee un doble sentido: examinar la formación, evolución y funcionamiento de las Fuerzas Armadas en nuestro país, así como sus relaciones con la élite civil a lo largo de seis décadas del siglo XX.

las fuerzas armadas de Colombia: ¿dónde se inicia su historia?

El «mito por los orígenes», tantas veces criticado por el historiador francés Marc Bloch², parece perseguir a gruesa parte de la historiografía sobre las Fuerzas Armadas en Colombia. Interesados en incluir al Ejército Libertador en su árbol genealógico, diversos autores no vacilan en ubicar allí las primeras huellas del Ejército Nacional. Pero es claro que, luego del efímero levantamiento de las escasas tropas del General José María Melo en 1854, la herencia del Ejército Bolivariano desapareció con el beneplácito de las élites civiles.

En 1855, durante el gobierno conservador-liberal de Manuel María Mallarino, el ejército central fue reducido a 588 hombres y poco después a 373 unidades³. La partida de defunción del ejército central era una necesidad para el nacimiento del federalismo y la seguridad de las élites regionales. Se dio paso, entonces, a los ejércitos particulares, a las «montoneras» construidas por «caciques» y propietarios.

III, Volúmen 2, pp. 179-234.

6. Citado por Indalecio Liévano. *Rafael Núñez*. Bogotá, Segundo Festival del Libro Colombiano, s.f., p. 213.

7. Rafael Núñez. «*Epistolario*», [6-V-91] y, *La reforma política. Mensaje de*

A diferencia de otros países latinoamericanos, en Colombia no hubo gobernantes que se eternizaran en el poder, y sólo tres alzamientos culminaron con la victoria de los insurrectos. No obstante, la violencia política se expresa en nueve grandes guerras civiles, repetidas revueltas regionales y múltiples enfrentamientos entre pequeñas ciudades. Las guerras del Coronel Buendía, las de aquel a quien nadie escribía, y las del «patriarca»⁴, se convirtieron en la mejor forma de hacer política. La carrera política era la carrera de las armas. Los jefes de partido eran también «generales». Uribe Uribe, soldado raso herido en la batalla de Los Chancos (1875), sería 25 años más tarde el jefe de los liberales. Rafael Reyes, de pudiente familia pero desconocido vencedor de los radicales en 1885, sería presidente en 1905. El poder de cada partido residía en el vigor de sus ejércitos de reserva. Entonces, los contornos entre guerra y política se confundieron y poco se fijaron las fronteras entre la Constitución y las armas⁵.

La idea de un carácter nacional para el Ejército y la Policía en Colombia reapareció con claridad durante el gobierno de Rafael Núñez. En su concepto, sólo una fuerza armada de tal índole podría hacer frente a los «subrepticios atizadores de las guerras locales», a los «enemigos de la paz del país»⁶.

2. Cf. Marc Bloch. *Apología de la Historia*. México: F.C.E., 1971.

3. Antonio Pérez. *25 años de historia colombiana: 1853 a 1878. Del centralismo a la federación*. Bogotá: Ed. Sucre, 1959, p. 46.

4. Recuérdese, de Gabriel García Márquez, *El coronel no tiene quien le escriba* y *El otoño del patriarca*.

5. La historia del Ejército Brasileño se aleja, sin embargo, de las circunstancias predominantes en el resto de países latinoamericanos. La continuidad de las Fuerzas Militares en Brasil no es interrumpida como lo explicamos para el caso colombiano. Por el contrario, en la medida en que incluso la independencia de Brasil se efectúa sin grandes luchas y sin grandes movilizaciones populares, la estructura del ejército conserva los rasgos coloniales. Según Murilo de Carvalho, ningún otro ejército latinoamericano como el brasileño sostuvo tantas semejanzas con las tradiciones militares europeas, con importantes consecuencias políticas: ellas posibilitan la identificación entre oficiales y grupos dominantes, pero aíslan a los soldados; garantizan la lealtad de los oficiales al gobierno, pero aumentan por esa misma razón el poder político de los militares. De plano, no existe el caudillismo. José Murilo de Carvalho. *As Forças Armadas na primeira república: o poder desestabilizador*. En, *Historia geral da civilização brasileira: «O Brasil republicano»*. Rio de Janeiro: Difel, Tomo

y se dio inicio a la carrera militar y su historia.

los primeros años: ¿cuál Ejército?

A título de paréntesis metodológico, parece pertinente advertir que, al tomar como punto de partida los períodos históricos conocidos como la Regeneración y el Quinquenio de Reyes, el proceso de formación de las Fuerzas Armadas en Colombia ha seguido el ritmo de las condiciones sociales y de los progresos, continuidades y rupturas propias de la formación y construcción del Estado y del régimen.

De este modo, en el presente texto, lo importante no será interrogar acerca de la manera en que los militares han ejercido una influencia sobre los asuntos de poder del Estado o del régimen político, sino de invertir la pregunta: cómo las Fuerzas Armadas han reflejado el desarrollo y las condiciones concretas del Estado y cómo revelan el devenir de las realidades sociales. Se recuerda, en este ámbito, la célebre fórmula de Tocqueville según la cual, sin olvidar el análisis de la institución militar en sí misma, es necesario examinar la relación entre el tipo específico de las Fuerzas Armadas y el tipo de régimen social y político al cual ellas corresponden¹⁰. Recomendación que no riñe con el aporte de Samuel Huntington, para quien el análisis de todo cuerpo militar en un Estado Nacional debe abordarse a partir del estudio de las relaciones entre civiles y militares, como un sistema compuesto por elementos interdependientes, donde los componentes principales son la posición estructural de las instituciones militares en el gobierno, así como el rol informal y la influencia de los uniformados en la política y la sociedad en general, tanto como la naturaleza de sus ideologías¹¹.

CEREC, 1991, p. 36.

10. Cf. Alexis de Tocqueville. *De la démocratie en Amérique*. Paris: Garnier Flammarion, 1983. T. 2, p. 331.

11. Samuel Huntington. *The soldier and the state. The theory and politics of civil-military relations*. Cambridge, 1957.

12. Ilustraciones relacionadas con la situación real del Ejército aparecen en textos como: Tomás Rueda V. *El Ejército Nacional*. Bogotá: Librería

Para el proyecto regenerador de Núñez, la construcción de un orden político interno y de un Estado Nacional, en tanto suponían la centralización, exigían el desmonte de los cuerpos armados regionales y la conformación de un Ejército Nacional que actuase como base armada legítima de las decisiones del Estado: «No hay otra política de paz que la fuerza»...«Si hay mucho ejército, hay mucha paz»⁷.

La propuesta de Núñez empezó a tomar forma en 1891 cuando el designado Carlos Holguín creó la Academia Militar bajo la dirección del coronel norteamericano Henrique Lemly y contrató al oficial de policía francés, Marcelino Gilibert, para organizar el cuerpo de gendarmería. Ambos intentos, continuados por esfuerzos de Miguel Antonio Caro en 1896 y por Manuel Antonio Sanclemente en 1899, fracasaron bajo la presión de las confrontaciones políticas⁸. A finales del siglo XIX y poco antes de la «Guerra de los Mil Días», el panorama del Ejército central era deplorable. Sus oficiales carecían de formación pero gozaban de la ociosidad y el alcohol; prevalecía la componenda y el padrinazgo político para la obtención de ascensos; los esfuerzos de instrucción, en menosprecio del servicio de campaña, se orientaban al orden cerrado y la parada militar: «un ejército así formado, resultaba muy efectivo e impresionante en las procesiones de Semana Santa, pero pésimo en las acciones de guerra»⁹.

El conflicto de los «Mil días» afectó en forma definitiva los propósitos de un Ejército Nacional. Los civiles ocuparon una vez más el lugar de los uniformados y los grados se obtuvieron en el directorio político o en el campo de batalla. Las armas se diseminaron y desapareció la instrucción con sus gendarmes internacionales. Sólo hasta 1905, obtenida la paz, Rafael Reyes tuvo la oportunidad de pensar nuevamente en la centralización y modernización del Estado. Entonces, la profesionalización militar se consideró requisito fundamental para la estabilidad interna, aunque no tanto como garantía de la soberanía nacional. Volvieron las misiones; esta vez chilenas pero formadas en academias prusianas. Empezaron a funcionar las Escuelas

instalación al consejo de delegatarios. Bogotá, PPCC, s.f., p. 78.

8. Sobre el tema, obsérvese: Adolfo Atehortúa y Humberto Vélez. *Estado y Fuerzas Armadas en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo editores-Universidad Javeriana Cali, 1994.

9. Carlos Eduardo Jaramillo. *Los guerrilleros del novecientos*. Bogotá:

de la Misión Chilena encabezada por Francisco Javier Díaz y Pedro Charpin Rival (1909-1911), quienes tenían claro el modelo de un Ejército profesional al que aspiraba la élite civil del llamado «Partido Republicano», dominante en la primera década del siglo XX en Colombia.

No obstante, la lógica de la historia y sus dificultades no se ocultan al proceso. Los ideales y propósitos de misiones, códigos y discursos fueron opacados por las prácticas sociales y partidistas. La cantidad de armas entregadas y decomisadas fue abundante. Sin embargo, muchos dirigentes y «patrones» regionales no renunciaron a sus arsenales. Desconfiaban de la paz y no aceptaban entregar el instrumento que les había garantizado el ejercicio de la política en el siglo XIX. Así mismo, los viejos comandantes cuyos grados habían sido adquiridos en las guerras se rebelaron contra el deseo de instrucción y capacitación militar: no estaban dispuestos a someterse al estudio y no permitirían, de ninguna manera, la superioridad y calidad de oficial adquirida por jóvenes «en las sillas de una academia». Las guarniciones se trasladaban de un lugar a otro, se llamaba a calificar servicios sin justa causa y se buscaba el retiro de jóvenes que empezaban a descollar en la carrera militar o se oponían con ardor a una formación basada en el orden interno y el oropel de las procesiones. Al sistema de ascensos por méritos y capacitación, se enfrentaron las presiones de la dirigencia partidista: reinó el clientelismo político y familiar¹².

No era para menos. Desde el siglo XIX, la dirigencia política mostró un profundo interés por controlar el aparato estatal en sus más altas esferas: civil, eclesiástica y militar¹³. Entonces, los cadetes admitidos en las academias militares sufrieron un riguroso proceso selectivo que incluía su adscripción partidista. No era difícil, el alfabetismo y grado escolar eran una forma simple de marcar las diferencias sociales. En Colombia no existió la posibilidad de que un maestro de escuela o un oficinista municipal se convirtieran en líderes políticos y militares, como Calle y Cárdenas en México. Los oficiales tampoco se hicieron generales en virtud a ocupaciones extranjeras como Somoza y Trujillo

En este sentido, antes que una cronología de las Fuerzas Armadas o, particularmente, del Ejército, en los primeros años del siglo XX, el presente acápite intenta una aproximación a sus diferentes características de construcción y desarrollo. Características y sucesos que se comparan, en algunos casos, con lo sucedido a otros ejércitos del continente.

Para la historiografía, en general, es indudable que correspondió al período iniciado por Rafael Reyes el fijar los preceptos iniciales de la profesionalización militar. Las medidas se consignan en el estatuto que el gobierno mismo definió como «La Reforma Militar», cuyas decisiones fundamentales abarcan cuatro campos: se intentó recuperar para el Estado el monopolio sobre las armas, dispersas masivamente entre la población a raíz de las guerras civiles; se redujo la composición del ejército para hacerlo más operativo; se impulsó la capacitación configurando la carrera militar a partir de la academia, y se intentó promover un reconocimiento nacional a la existencia de las Fuerzas Armadas, para superar su reputación partidista.

En lo concreto, la Reforma podría ubicarse institucionalmente con la creación de la Escuela Militar de Cadetes y la Escuela Naval Nacional en 1907. Un poco tarde, si se tiene en cuenta que las Escuelas de Oficiales fueron creadas desde 1810 en Brasil, en 1869 en Argentina, 1885 en Uruguay, 1891 en Bolivia y en 1896 en Perú. Pero, más importante que su fundación, fue la contratación posterior

Colombiana, 1944; Sergio Burbano. *Intervención en sesión de la Cámara de Representantes*. Bogotá, s.p.i., 8 de agosto de 1916, o incluso en los «*Informes*» de los Ministros de Guerra ante el Congreso. La formación de los militares en Brasil resulta mucho más singular. La Academia Real Militar data de 1810 y de ella nacen la Escuela Militar y Politécnica con una influencia positivista tan grande como que el propio Benjamin Constant fue profesor en sus aulas. Su orientación consiste en formar oficiales bajo la idea de «soldados-ciudadanos»: en todas las áreas de las ciencias humanas y naturales.

13. Consúltese, al respecto: Alvaro Tirado. «El Estado y la política en el siglo XIX». En, *Nueva Historia de Colombia*. NHC. Bogotá: Planeta, 1978. Vol. 2, pp. 155-184.

14. Alain Joxe. *Las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile*. Santiago: Edición universitaria, 1970, p. 53.

fin y al cabo, la introducción del servicio militar obligatorio no era un problema estrictamente militar. Por el contrario, en la medida en que auguraba y hacia exigible el sufragio universal, era también un asunto político.

Colombia, por otra parte, no tuvo un conflicto con sus vecinos que le exigiera, en forma temprana, un tipo diferente de cualificación y profesionalización en sus tropas. Ni siquiera en la corta guerra con el Perú, en 1932, el ejército colombiano pudo erigirse como símbolo de identidad nacional. Sus pocas batallas se realizaron lejos de las regiones pobladas y el final diplomático fue reclamado por los civiles como obra suya. Este aspecto, considerado en términos cotidianos y románticos como «suerte histórica», constituye en realidad una ausencia crítica cuando se trata de estudiar las circunstancias que conducen a la formación de un Estado Nacional¹⁶.

un ejército conservador, una policía liberal

La voluntad por construir unas Fuerzas Armadas modernas y profesionales, en consonancia con el Estado Nacional propuesto a fines del siglo XIX y principios del XX, encontró en los partidos su principal obstáculo. A partir de la Regeneración y más aún, durante la llamada Hegemonía Conservadora, el Ejército central del Estado se convirtió en un Ejército del gobierno y, por consiguiente, en un Ejército conservador. La cartera de «la guerra» -como se llamaba entonces al ministerio encargado de los asuntos militares- no pocas veces fue señalada por su marcado sesgo partidista: «su ideal es el Ejército conservador, el Ejército que delibere, el Ejército de un partido»¹⁷. La Misión Chilena renunció, incluso, advirtiendo que «en tales circunstancias nuestra labor será estéril y nuestra permanencia contraria a nuestro decoro personal»¹⁸.

En la medida en que el peligro de las guerras civiles desapa-

18. «Dimisión de la Misión Chilena», reproducida por el diario *La Fusión*, octubre de 1909.

19. Cf. Christopher Abel. *Política, iglesia y partidos en Colombia*. Bogotá: FAES-Universidad Nacional, 1987, pp. 60 y 61.

20. Datos relacionados por el *Diario Oficial* y los *Informes o Memorias* de los

en Nicaragua y República Dominicana respectivamente. No hubo condiciones para una carrera militar ascendente que permitiera llegar, al generalato y al poder, a mestizos de bajo estrato como Tata Belzú y Melgarejo en Bolivia. Así, el reclutamiento de oficiales por vínculo familiar o relación partidista, agregado al carácter no meritocrático de los ascensos, reguló el poder civil sobre los militares.

Tan tarde como las escuelas, llegó a Colombia el servicio militar obligatorio, imagen de las transformaciones militares en los ejércitos de América Latina. Chile lo implanta en 1900 doblando automáticamente los efectivos del ejército¹⁴; Argentina le sigue un año más tarde con grandes reformas sobre el organismo armado. Perú lo tuvo ese mismo año, Ecuador en 1902, Bolivia en 1907 y Brasil en 1916. En Colombia, obstáculos clasistas creados por los grandes propietarios y gamonales desde sus localidades, impidieron la vigencia de un servicio sobre el cual el aparato legislativo tampoco se manifestaba por completo. En efecto, hasta 1914, la ley permitía los rescates por reemplazo pago, mientras el gobierno autorizaba los reclutamientos sobre la población paupérrima de las zonas más conservadoras. Por ello no será difícil encontrar quejas frente al reclutamiento militar como ésta, en la I División del Ejército: «un personal compuesto de inútiles, de conducta dudosa, de diferentes edades, hasta de 35 años, casados, con hijos y aún varios idiotas...»¹⁵. Al

15. *Memorias de la I División del Ejército*, 1914, original inédito en la Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá.

16. En efecto, al estudiar tales condiciones en los Estados de Europa occidental, Charles Tilly concluye que: «los esfuerzos para subordinar a los vecinos y luchar contra rivales más lejanos crean las estructuras del Estado en forma no sólo de ejércitos, sino también de personal civil que reúne los medios para sostener los ejércitos y que organiza el control regular del soberano sobre el resto de la población civil». Cf. Charles Tilly. *Coerción y capital en los Estados Europeos 990-1990*. Madrid: Alianza Editorial, 1992. p. 45. En Brasil, por el contrario, la guerra contra Paraguay (1879-1883), convierte al Ejército en «defensor de la patria». Precisamente, a efecto de contrarrestar el enorme prestigio que los uniformados adquieren entre la población civil, las élites regionales deciden debilitar a las Fuerzas Militares a partir de la federación constitucional de 1891, y crean un cuerpo paralelo de milicias en los estados regionales que, aún hasta 1964, sobrepasaba en su número de efectivos al ejército federal. Cf. Heloisa Rodrigues. *A Força pública do Estado de São Paulo*. En, *Historia geral da civilização brasileira...* *Op. cit.*, pp. 235-256.

17. Diario *El Domingo*, editorial octubre 10 de 1909.

De hecho, a partir de 1930, la preocupación del nuevo gobierno por el carácter del Ejército será insoslayable. Olaya Herrera prohíbe el voto a los militares activos reclamando su «apoliticidad», e intenta reformar las condiciones de ingreso y capacitación en la Escuela Militar, hasta que el conflicto con el Perú destroza sus iniciativas.

Si bien este conflicto determinó una preocupación naciente en torno a la soberanía nacional y la necesidad de un Ejército profesional que se plasmó en el presupuesto de defensa, transcurrido el impacto sociopolítico de la guerra el Ejército retornó paulatinamente a su estado de postración institucional. Opacado en sus apoyos nacionales y sometido a una cambiante política militar del régimen liberal, la evolución de los gastos militares en el presupuesto nacional ofrece un indicio revelador:

Cuadro No. 1
Gastos Militares y porcentaje
con respecto a Gastos Públicos Nacionales
1933-1944
(cifras en millones de pesos)

Año Fiscal	Gasto Militar	% con respecto al Presupuesto Nacional
1933	21 350	36,4
1934	23 691	32,3
1935	14 541	24,1
1936	14 042	19,4
1937	12 771	15,2
1938	14 229	16,4
1939	14 143	15,9
1940	20 853	15,7

Ministros de Guerra al Congreso de la República durante el período aludido.
 21. Richard Maullin. *Soldiers, guerrillas and politics in Colombia*. Londres: Lexington Mass., 1973, p. 55.

22. Gabriel García Márquez. *Cien años de soledad*.

23. Entre las medidas del gobierno figuraba la contratación de una Misión Chilena para tecnificar los servicios policiales, el incremento presupuestal para la adquisición de nuevos recursos, la organización de la Escuela de

reció y se acrecentó el dominio de la Hegemonía Conservadora, el Ejército perdió importancia. Según Christopher Abel, tras la sangrienta «Guerra de los Mil Días» no había cómo rescatar ningún tipo de mística militar. La élite ya no consideraba las proezas en combate como una meta deseable y abrió en flor la época de los políticos civiles, los centenaristas. El Ejército se convirtió en elemento secundario de la organización política. Las diferencias entre propietarios y entre miembros de las distintas facciones políticas, fueron mediadas por la Iglesia sin recurrir a la intervención militar¹⁹.

A partir de 1910 y hasta 1930, el número de efectivos del Ejército osciló entre cinco mil quinientos y seis mil doscientos hombres entre oficiales y soldados²⁰. Era el más reducido y con el presupuesto militar más bajo en toda Suramérica²¹. Tamaño que, sin embargo, resultaba suficiente para controlar un orden público agitado por la irrupción de las luchas obreras desde 1911. Entonces, los soldados jugaron un doble papel: como votantes móviles en lugares en que el partido conservador precisaba de mayorías, o como bloque marcial contra las protestas laborales de artesanos y trabajadores liberales o socialistas. La masacre que presenciara José Arcadio Segundo en la Plaza de Ciénaga, Magdalena, contra los trabajadores bananeros y que ocurrió realmente en diciembre de 1928²², constituye la mejor y más triste muestra del papel asumido por el Ejército.

Precisamente, fue a raíz de la masacre en las bananeras que el Partido Liberal encontró la oportunidad propicia para restar prestigio a las Fuerzas Armadas y debilitar así el bastión que podía proteger al régimen conservador. La joven voz de Jorge Eliécer Gaitán se levantó señaladora en la Cámara de Representantes y los estudiantes capitalinos le secundaron cuando el gobierno nacional pretendió nombrar como nuevo Jefe de la Policía al General Carlos Cortés Vargas, comandante en la matanza. El desprestigio del régimen y su ejército, sumado a la división del partido conservador, propiciaron entonces la transición entre la Hegemonía Conservadora y la República Liberal.

beralización» de la Policía. La participación presupuestal superó a veces la del Ejército; recibió el impulso de misiones extranjeras y la constitución de compañías de policía militar; incrementó sus efectivos y la calidad de sus armas. Todo un mecanismo eficaz para asegurar un pie de fuerza leal sobre el cual pudiera recaer la seguridad del gobierno y del partido liberales, frente a la desconfianza que ofrecía un ejército heredado de la Hegemonía Conservadora.

el ejército como actor político

A partir de 1943, durante la segunda administración de López Pumarejo, el Ejército empezó a considerarse actor protagónico de la vida política nacional. Corrían rumores de «golpe» alentados por una oposición conservadora que, encabezada por Laureano Gómez, no era mal vista por miembros de la élite liberal asustada e indignada por el populismo presidencial. El gobierno respondió con la disminución del pie de fuerza del Ejército y con un llamado a altos oficiales para calificar servicios. Pero, al mismo tiempo, nombró como Ministro de Guerra a un militar de su confianza rompiendo con una antigua tradición -respetada incluso durante la hegemonía conservadora- que sostenía el predominio de civiles en esa cartera.

Al descontento del Ejército, atizado por la oposición civil, se sumó el denodado esfuerzo presidencial por fortalecer la Policía²³. Entonces el golpe se hizo realidad el 10 de julio de 1944 y, aunque terminó en el fracaso, abrió una enorme ventana por donde empezaría a asomarse la acción política de los militares: el gobierno concedió al Ejército la competencia para juzgar opositores civiles en consejos verbales de guerra. Sin embargo, existe una connotación del golpe militar que no ha sido estudiada a profundidad. Si se toman las declaraciones de Diógenes Gil, la cabeza militar visible del movimiento, algunas frases revelan el primer intento de los uniformados por convertirse en actores de poder²⁴.

Por consiguiente, los sucesos del 9 de abril de 1948 no encontraron a un Ejército totalmente alejado de la acción

1941	-	-
1942	16 004	10,2
1943	15 573	8,6
1944	21 549	11,5

Fuente: Contraloría General de la República, años 1933-1944.
No se encontró informe disponible para el año 1941.

Es claro que, entre 1938 y 1942, el gobierno de Eduardo Santos intentó conservar el nivel de incidencia de los gastos militares en el presupuesto nacional. Pero, por el contrario, son los períodos de Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945) los que inician el más notorio descenso de la inversión militar con respecto a la inversión general de la nación, así en cifras relativas se presente un ligero aumento.

No obstante, fueron otros los terrenos en los cuales se plasmó la concepción de la llamada «República Liberal» y de la «Revolución en Marcha» con respecto al Ejército. En primer lugar, por ejemplo, el legislativo expresó con normas la prohibición de participar en política para los militares -extendida a la reserva- y creó un nuevo escalafón castrense para incluir en calidad de oficiales a los viejos revolucionarios de la «Guerra de los Mil Días» y colocar liberales al mando del Ejército.

En segundo lugar, un nuevo concepto sobre la «productividad militar» en tiempos de paz se utilizó como fundamento para dedicar a la alfabetización, a las obras públicas y a la colonización agrícola, a los regimientos más tradicionales. Pero, en realidad, con su política López pretendía alejar a los militares, en forma efectiva y salomónica, de la órbita central y urbana de la nación.

Finalmente, la más concreta iniciativa del gobierno liberal frente a los asuntos militares fue la nacionalización y «li-

formación, la creación de la Policía rural y la ampliación de la nómina de agentes y del cuerpo de detectives.

24. Tal como afirmó Gil a *El Tiempo*, el «golpe» no lo dio contra López sino para defender al Ejército, porque éste «andaba rengueando peligrosamente y porque era necesaria la emancipación espiritual y moral de las armas

fugitivo» y el coraje de su esposa, con dos pistolas al cinto, no permitieron dudas ni a los militares, ni mucho menos a los dirigentes liberales. Por otros caminos, además, los militares fueron conscientes de su ascenso político: «salvadores de la Constitución y de las instituciones», como les repetía el presidente Ospina, recuperaron el Ministerio de Guerra, asumieron más alcaldías, algunas gobernaciones y, poco después, otros ministerios. Así, el devenir de los militares, antes que enmarcarse en un fuerte carácter profesional o en una vigorosa neutralidad frente a los partidos políticos y sus pugnas; lejos de enarbolar un proyecto propio de Estado, nación o clase, atravesó, por el contrario, el cauce de un nuevo y complejo papel frente al control del orden público, asignado de manera excepcional y a través del estado de sitio por las élites gubernamentales.

No muy diferente fue la actitud del Ejército tras la llegada de Laureano Gómez al gobierno: asumir con aguda fortaleza y represión el control del orden público para favorecer al régimen. Sólo que, inmersas en el conflicto, las Fuerzas Armadas quedaron expuestas de nuevo a cierto tipo de clientelismo conservador cuando la Violencia se extendía por todas las regiones de Colombia²⁵.

Así las cosas, al examinar hasta aquí el periplo de las Fuerzas Armadas en Colombia, el modelo teórico liberal de relaciones civico-militares resulta inaplicable. Condensado en teoría por Samuel Huntington y la sociología militar norteamericana²⁶, dicho modelo presupone una sociedad con instituciones civiles fuertes y desarrolladas en donde el militar espera la guía política del estadista.

De hecho, no es éste el caso de Colombia. Por el contrario, Argentina, los militares ingresan a la política guiados por el liderazgo de Irigoyen y movilizados por las nacientes esperanzas insurreccionales de los radicales. Estos últimos autodeclaraban al ejército como una de sus principales fuerzas o como ciudadanos «con el sagrado deber de ejercer el recurso supremo de la protesta armada». Ver: «Manifiesto de la revolución del 4 de febrero de 1905», en Carlos J. Rodríguez. *Irigoyen, su revolución política y social*. Buenos Aires: Librería la Facultad, 1943, p. 115-122.

26. Ver: Samuel Huntington. *Op.cit.* Igualmente, para un balance bibliográfico de la sociología militar norteamericana, obsérvese: Kurt Lang. *Military institutions and the sociology of war. A review of the literature with*

política. Dos años antes, con el arribo del partido conservador al gobierno, los militares empezaron a recibir halagos presidenciales. Aunque la cartera de guerra fue ocupada por un civil, brotes de violencia regional colocaron a los uniformados, por voluntad del presidente Ospina Pérez, a la cabeza de casi doscientas alcaldías municipales. De modo que, tras el asesinato de Gaitán y «El Bogotazo», la decisión de muchos oficiales del Ejército no fue difícil: por un lado, salir a la calle para enfrentar cuerpos de policía liberalizada a fuerza de privilegios y masas de liberales que, al desbordarse en las plazas públicas en julio del 44, derrumbaron el golpe que se inició en Pasto contra López. Y, por otra parte, presentarse ante el presidente para hacer valer con mayor énfasis su papel político.

Uno y otro hecho deben considerarse, sin embargo, en su entera dimensión. La ira popular descontrolada y una élite liberal que, lejos de ponerse a la cabeza de la agitación insurreccional, acudió oculta y presurosa a buscar negociaciones en el Palacio presidencial, instaban a los militares al control del orden público. Pero, igualmente, la debilidad estructural del Ejército y su trayectoria de subordinación ante el gobierno, le llevaron a desechar la posibilidad de asumir el poder por sí mismo, a través de una Junta Militar, como en apariencia proponía Laureano Gómez. La frase de Ospina: «vale más un presidente muerto que un presidente

colombianas». Mucho después argumentó que «los políticos azules y rojos» no podían ocultar su responsabilidad de haber preparado «con sus vicios inveterados de egoísmo, ambición y petulancia, un ambiente retenido de protesta y desesperación... hasta lograr el fermento de descontento y frustración capaz de precipitar a la subversión a tan crecido grupo de militares». Diógenes Gil. *El 10 de julio: armas más útiles y costeables*. Bogotá: Antares, 1971, documentos, 1a. parte.

25. El peligro de utilización del Ejército por la élites políticas no sólo lo vivió el Ejército colombiano. En Brasil, la influencia sobre las Fuerzas Militares fue materia de disputa partidista. El Ejército poseía una base de reclutamiento territorial que sirvió a Getulio Vargas en 1930, y permitió la instauración del *Estado Nôvo* en 1937. De manera similar, el Ejército fue llamado a la contrarrevolución de 1932 iniciada en el estado de San Pablo; fue vital en el derrocamiento del mismo Vargas en 1945; buscado como aliado por el presidente Jânio Quadros en 1961, o utilizado por João Goulart en el mismo año para acceder al gobierno. Ver: Alfred Stepan. *Brasil: los militares y la política*. Buenos Aires: Amorrortu, 1971. En

y diálogo entre los partidos. La Asamblea Nacional Constituyente reconoció el carácter presidencial a Rojas y éste lo asumió investido de legitimidad. Los Ministerios fueron distribuidos inicialmente entre militares y conservadores, pero parte considerable de los cargos políticos fueron entregados a funcionarios de uno u otro partido. Rojas ofreció la reestructuración del poder judicial y estableció el sufragio femenino, pero suspendió elecciones y reemplazó las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales por cuerpos administrativos.

No obstante, cuando el General Rojas permitió entrever la creación de un nuevo Estado, la calificación de su gobierno como «dictadura militar» se convirtió en bandera de agitación para diversos sectores de la sociedad y de la política. Los periódicos liberales sufrieron de nuevo la censura y una torpeza hirió de gravedad al régimen: un núcleo de detectives arremetió contra los asistentes a una corrida de toros, porque se negaron a elogiar el arribo de la hija del General.

Para entonces, el gobierno de Rojas no se pensaba como puente para facilitar el retorno de los partidos, sino como continuación de su propia elección y re-elección. En primer lugar, procedió a crear su propio partido y chocó con la jerarquía eclesiástica. Organizó luego una Constituyente propia que, basada en la de Gómez, buscaba eternizarlo en el poder. Así, ante la amenaza de Rojas por crear una «Tercera Fuerza» respaldada en el binomio pueblo-fuerzas

annotated bibliography. Beverly Hills-London: Sage publications, 1972. De la misma editorial: Bengt Abrahamsson. *Military professionalization and political power*, 1972 y Roger Little. *Handbook of military institutions*, 1971. Así mismo: Morris Janowitz and Jacques Van Doorn. *On Military intervention. Studies presented at Varna International Sociological Association*. Rotterdam University press, 1971.

27. Al efectuar una explicación similar para el proceso brasileño, Alfred Stepan concluye que, dado el deseo de las élites políticas de mantener el orden interno, controlar al poder ejecutivo y poner coto a la movilización política de grupos nuevos, y a falta de otras instituciones que puedan cumplir con eficacia dichas funciones, las élites políticas hallan oportuno conceder a las Fuerzas Armadas cierto grado de legitimidad para encarar su cumplimiento en condiciones específicas. Cf. Alfred Stepan. *Op. cit.*, p. 80.

28. Alain Rouquié. *Op. cit.* p. 73.

29. Juan R. Beltrán. «Misión del oficial frente a los problemas sociales contemporáneos». En, *Revista Militar*, Buenos Aires, septiembre de 1936,

la ausencia misma de instituciones políticas fuertes genera la acción de los civiles para obtener el apoyo militar en la prosecución de sus fines políticos. Al terminar la primera mitad del siglo XX, bien puede afirmarse que no son los militares quienes «invaden» el campo de la política. Ellos tan sólo responden a la percepción generalizada de inestabilidad en el sistema político, a las precariedades del Estado, a la debilidad de las instituciones civiles y a la voluntad de la élite política para introducirlos en el terreno partidista²⁷. A diferencia de otras latitudes continentales, las Fuerzas Armadas optan por asumir la función política permitida y estimulada por los civiles, pero siempre colocada a su servicio: control electoral, presencia y acción militar en defensa de las propiedades e intereses de la élite, instrumentación partidista o apuntalamiento del bipartidismo, acceso permanente al eje gubernamental y al ministerio de guerra, participación en alcaldías y gobernaciones y, sobre todo, otorgamiento de facultades a la Justicia Penal Militar para juzgar conductas políticas de la población civil, bajo normas y estatutos de excepción.

la dictadura de Rojas: ¿el poder de los militares?

La necesidad de superar la desbordante situación de violencia y caos en que se encontraba el país, y de recuperar para el Estado la funcionalidad de sus instituciones y la legitimidad del sistema, produjo el golpe militar del 13 de junio de 1953. Gómez no comprendió que los límites de su autoritarismo lindaban con los intereses del Estado y de grupos privilegiados. Entonces, inspiradas por la intelectualidad de la oposición conservadora, respaldadas por Ospina Pérez cuya candidatura presidencial había vetado Gómez, y con el beneplácito de la élite liberal cuyos líderes se encontraban en el exilio, las Fuerzas Armadas en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla consumaron un golpe de Estado.

Las primeras medidas del nuevo gobierno militar auguraron la reconciliación nacional: indulto y amnistía para detenidos políticos y alzados en armas, libertad de prensa

posterior activismo militar²⁸.

Desde luego, en las filas de los oficiales australes creció la autoconcepción de una casta militar compuesta por los «elementos más puros de la sociedad argentina»²⁹, cuyo sueño será materializado por el nacionalismo popular peronista. Por consiguiente, en lugar de las élites, el 17 de octubre de 1945, será una enorme masa de «descamisados» lo que exija en la histórica Plaza de Mayo la presencia del Coronel Juan Domingo Perón en el poder. Los militares argentinos, desde entonces, comprendieron que tenían la capacidad para asumir por sí solos el poder, aplastando a los partidos tradicionales, si contaban con el apoyo popular³⁰.

En Colombia, por el contrario y tal como opina Marco Palacios, el término de «militar» que califica el gobierno de Rojas requiere precisiones. «La legitimidad inicial del régimen provino de su proyecto de pacificación y reconciliación nacional»³¹. Además, el gobierno se instaló sobre las bases partidistas del conservatismo ospino-alzatista, en tanto que la élite liberal aduló a Rojas con los títulos de «Salvador de la Patria» y «Libertador». Aunque el gasto militar y de policía creció durante su periodo, el gobierno de Rojas no fue tampoco una dictadura recalitrante. Proscribió al Partido Comunista pero no persiguió con saña y a muerte a sus militantes. Cerró *El Tiempo* y *El Espectador*, pero permitió que *El Intermedio* y *El Independiente* aparecieran en su reemplazo. Cuando recién se perfilaba con proyecto político propio, recibió la oposición de todos los sectores que lo habían entronizado y se inició su derrumbe.

Aunque el gobierno de Rojas perfiló a los militares en funciones políticas que no habían disfrutado hasta entonces, no perdió la decisoria influencia civil, partidista y eclesiástica que le dio origen. Cuando ciertos rasgos peronistas aparecieron en el General con la organización del Movimiento de Acción Nacional, MAN, y la creación de una nueva central sindical, la Confederación Nacional de Trabajadores, CNT, las mismas facciones civiles que lo llevaron al gobierno le declararon la oposición. En mayo de 1957, por orden patronal,

presenció atroces masacres con aberrantes rituales de tortura. La dictadura de Rojas no escapa tampoco a las apreciaciones: al intentar apoyo para

armadas, Alberto Lleras obtuvo de Laureano Gómez la firma del «Pacto de Benidorm», con el cual se impulsó la formación de un Frente Civil que unió a los dos partidos contra la dictadura y propició el retorno del gobierno a manos bipartidistas.

Cuando Rojas consolidó su dictadura, en 1954, trece de los veinte Estados latinoamericanos se hallaban bajo el poder marcial. Algunos más, como es el caso de Bolivia con Víctor Paz Estenssoro, tenían un presidente civil pero de facto. En muchos de ellos, la Constitución se encontraba interrumpida o no contemplaba procesos de elección y sucesión presidencial. Al generalizar las circunstancias, el golpe de Estado propinado por Rojas ha sido analizado muchas veces como parte de la irrupción que los militares protagonizan con respecto a la política y el poder en toda Latinoamérica.

Sin embargo, valdría la pena detenerse en una breve referencia al proceso seguido por los Ejércitos del continente cuya identidad se busca en el carácter de la jefatura y concepción de Rojas, para captar de inmediato sus visibles diferencias.

En el caso de Argentina, a diferencia de Colombia, los militares parecen haber sido formados para una misión social y política de trascendencia. Precisamente, la investigación de Alain Rouquié percibe desde 1918 las «fórmulas audaces y prematuras» que constituirán el *«leitmotiv»* del intervencionismo militar. Es más, en un discurso concreto del director del Colegio Militar de Buenos Aires, Rouquié encuentra en 1920 los elementos de un mesianismo subyacente al

pp. 499-513.

30. Finalmente, la tendencia será llevada al extremo por el golpe de Onganía el 28 de junio de 1966: «se disolvió el parlamento –el presidente concentró en sus manos los dos poderes– y también los partidos políticos, cuyos bienes fueron confiscados y vendidos, para confirmar lo irreversible de la clausura de la vida política». Cf. Luis Alberto Romero. *Breve historia contemporánea de Argentina*. México, F.C.E., 1994. Más consistente con el nuevo papel de los militares será el golpe del 24 de marzo de 1976, ejecutado por Videla, Massera y Agosti, reconocidos hoy por su intento de silenciar a la sociedad entera.

31. Marco Palacios. *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994*. Bogotá: Norma, 1995, p. 211.

32. Observados en la distancia y con las circunstancias más recientes del devenir colombiano, es posible que muchos hechos parezcan menos graves. Pero lo cierto es que, en la época de la Violencia, toda una generación

en el seno de los uniformados, de su sentido de adscripción partidista. En adelante, las Fuerzas Armadas dejarían de ser el soporte de partidos o facciones de partidos para convertirse en los pilares del régimen con respecto al orden público.

Sin embargo, otro proceso no debe ser descuidado en el análisis. La revolución cubana y la aparición del movimiento guerrillero en Colombia, ligaron a las Fuerzas Armadas de nuestro país con sus homónimas norteamericanas. Los antecedentes marcados por el gobierno de Eduardo Santos durante la Segunda Guerra Mundial³³, así como la participación del «Batallón Colombia» en la Guerra de Corea, resultan significativos.

Mucho se ha especulado al respecto y tal vez la prevención e ideologización del tema ha afectado su tratamiento. Las concepciones van de un extremo a otro: desde considerar al Ejército como un todo independiente a los dictámenes norteamericanos, hasta señalarlo como «ejército satélite» o incluso «títere». El presente acápite no intenta emitir juicios. Se limitará a mostrar la importancia de la influencia norteamericana sobre las Fuerzas Armadas de Colombia a través de tres elementos fundamentales: la ayuda financiera, la formación de cuadros y las posiciones claves que en el ejército y el gobierno colombianos han ocupado aquellos oficiales que se han formado o han desempeñado funciones en Estados Unidos.

La ayuda financiera norteamericana destinada a los gastos militares en América Latina se expresó, en los años sesenta y principios de la década de los setenta, a través de cuatro fuentes principales: el Programa de Asistencia Militar, la AID con donaciones o créditos, los créditos de la OPS, y auxilios especiales aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Colombia fue uno de los países más beneficiados

de paramilitarismo.

33. Cf. David Bushnell. *Eduardo Santos y la política del buen vecino*. Bogotá: El Ancora, 1984.

34. Las fuentes en mención pueden consultarse en la Biblioteca del Congreso Norteamericano.

35. La relación, sin embargo, es sólo tentativa. Se ha efectuado de acuerdo con la lista del «Batallón Colombia» publicada por Ramiro Zambrano en «Siluetas para una historia» (*Suplemento de la Revista del Ejército*, vol. 8,

bancos y fábricas cerraron. Los estudiantes se manifestaron en la calle y paralizaron el transporte urbano. Entonces, sin resistencia, Rojas depositó el gobierno en una junta integrada por cinco generales de extracción conservadora que propició el regreso del bipartidismo.

el frente nacional: comienza una nueva época

El Frente Nacional (1957-1974) abrió la etapa de colaboración política bipartidista más consolidada en la historia de Colombia. No nos detendremos en el análisis de sus características y dimensiones, aún por explorar en la historiografía contemporánea. Baste señalar que, entre las diversas transformaciones que dicho período imprime en el acontecer político nacional, una de las más importantes se refiere al papel de las Fuerzas Armadas.

Por una parte, tras la caída de Rojas y el advenimiento de la reconciliación política en los términos del nuevo acuerdo bipartidista, el desprestigio de los militares ante la opinión pública era innegable. Algunas razones podrían imputarse a su participación activa en el terror oficial y la Violencia, o a su compromiso con una dictadura destrozada en la opinión y responsable del fracaso de diversos intentos de pacificación³². Pero, por otro lado, como quiera que el Frente Nacional volvía inocuas las diferencias entre liberales y conservadores, la distinción partidista carecía de fundamento. Entonces, el cuadro de la situación no hizo difícil la transformación,

prolongar su gobierno, Rojas atacó a los campesinos desmovilizados en Villarrica, sin percatarse que con ello nacía la guerrilla con más larga vida en el continente: cincuenta campesinos fueron formados en fila india y fusilados, de la misma manera que se asesinó en Guadalupe Salcedo cualquier esperanza de amnistía y reconciliación. Los intentos de «pacificación» en 1952, según datos de James Henderson (*Cuando Colombia se desangró*. Bogotá: El Ancora, 1984), dejaron en una sola semana más de mil quinientos muertos en la región de El Libano. Pedro Antonio Marín, hoy Manuel Marulanda Vélez, «Tirofijo», quien parecía dispuesto a iniciar una nueva vida como inspector de caminos vecinales, volvió a las armas. Así mismo, la utilización repetida de los pájaros contra «nueveabrileños» y campesinos inocentes, tanto como la utilización de las guerrillas de «liberales limpios» contra las comunistas, sentó el más claro precedente

16	Honduras	6.1
17	El Salvador	5.3
18	Haití	4.5
19	Panamá	2.3
20	Costa Rica	2.0
Total		1.135,8

Fuente: «*The Latin American Military*». Estudio preparado para el Congreso Norteamericano por Edwin Lieuwen. Washington: Government Printing Office, 1967. p. 36.

Cuba sólo recibe ayuda hasta 1961 y se suspende la de Haití en 1962

Cuadro No. 3
Ayuda militar norteamericana
para Colombia y América Latina
1964-1972
(cifras en millones de dólares)

Año	MAP Colombia	MAP Latinoamérica	%	Ayuda AID	Créditos AID/OPS	Total Ayuda Norteamericana para Colombia
1964	6.20	52.10	11.9	0.69	0.34	7.23
1965	5.70	55.90	10.1	0.24	0.81	6.75
1966	3.30	58.40	5.6	0.67	1.79	5.76
1967	7.90	59.10	13.3	0.87	0.50	9.27
1968	12.20	72.80	16.7	0.10	0.34	12.64
1969	11.30		>12	0.48	0.29	12.07
1970	11.30		>12	0.21	0.26	11.77
1971	11.30		>12	0.24	0.24	11.78
1972	19.10	197.90	9.6		0.34	19.44
Total	88.3			3.5	4.91	96.71

Fuente: MURI, Willy. *L'armée colombienne: étude d'une institution militaire dans ses rapports avec la société en transition, 1930-1974*. Thèse de 3^e cycle. IHEAL. Paris, 1975. MAP: Military Aid Program.

El número de militares colombianos entrenados por Estados Unidos es igualmente considerable. Entre 1950 y 1970, al menos 4.629 militares de Colombia pasaron por las Escuelas norteamericanas en su propio territorio o en las bases ubicadas en Panamá. La cifra, sin embargo, puede ser mayor. Ha sido calculada con datos aislados del Departamento de Defensa, con los «Military Assistance Facts», una publicación periódica de los militares americanos, y con el «Nacla's Hand Book»³⁴, no con los archivos del Ministerio de

con la ayuda militar norteamericana. Entre 1953 y 1966, Brasil ocupó el primer lugar, pero tenía un ejército cuatro veces más grande que el colombiano en un territorio seis veces mayor. Comparativamente, Chile fue el más privilegiado: ocupaba el segundo lugar en apoyo financiero con cuerpos militares iguales en cantidad a los de Colombia en un territorio mucho menor, con la mitad de población. Aunque la ayuda se redujo durante la dictadura de Rojas, Colombia disputó a partir de 1958 el tercer lugar con Perú. Luego de Argentina, la ayuda ofrecida por Estados Unidos a los demás países del área era realmente débil. El cuadro número 2 de la página siguiente ofrece una clara ilustración al respecto.

En los años siguientes, aunque las informaciones son parciales, la tendencia es similar. Sin tomar en cuenta la ayuda militar por créditos, el aporte americano a través del Programa de Asistencia Militar destinada para Colombia, entre 1964 y 1972, más del diez por ciento del total asignado a toda latinoamérica. Incluso, a partir de 1968, el porcentaje es siempre superior al doce por ciento. (Ver Cuadro No. 3).

Cuadro No. 2

Asistencia militar norteamericana para América Latina años fiscales 1953-1966 (cifras en millones de dólares)

N°.	País	Cantidad
1	Brasil	374.1
2	Chile	143.4
3	Perú	134.3
4	Colombia	102.3
5	Argentina	87.6
6	Venezuela	66.8
7	Ecuador	52.9
8	Uruguay	44.5
9	R. Dominicana	19.6
10	Bolivia	17.6
11	Cuba	16.1
12	Guatemala	13.4
13	Nicaragua	9.4
14	Paraguay	8.3
15	México	6.7

misma manera como se acostumbró a que los presidenciables pasaran primero por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, los altos oficiales de las Fuerzas Militares pasaban previamente por misiones en Norteamérica³⁶.

Los datos nos permiten elementos de hipótesis para comprender con mayor exactitud el rol asignado por el Frente Nacional a los militares. Hecho explícito por Alberto Lleras, su nuevo papel los apartaba del esquema político y deliberante. Pero, si bien las Fuerzas Armadas no podrían decidir en adelante cómo gobernar a la nación, tampoco los políticos decidirían cómo manejar a las Fuerzas Armadas³⁷.

Aunque suene simplista, parecería lógico pensar que el presidente de Colombia con mayor grado de confianza por parte de Estados Unidos en toda su historia, baluarte sin igual en la política norteamericana de los años sesenta con respecto a Latinoamérica, de la creación de la OEA, del rechazo a Cuba y del repudio a la Unión Soviética, delegara en los militares, cuya formación y orientación se delineaba por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, toda responsabilidad frente al manejo del orden público en un momento en que la guerra fría se colocaba al orden del día. Más aún cuando la misma situación, en aras de su profesionalización y eficacia operativa, exigía que los uniformados se alejaran de todo compromiso partidista.

Los políticos, además, estaban más interesados en la construcción de maquinarias electorales o en el engranaje general del nuevo régimen. De modo que, si los militares recibían instrucción para ejercer en forma debida sus funciones, ellos podrían encargarse de la elaboración de planes estratégicos relacionados con el orden interno. Así, más que un deseo militar por intervenir en política o de buscar su autonomía en el manejo del orden público, fue la confianza y negligencia

No. 29, julio de 1967) y registrando los nombres obtenidos para algunos cargos militares importantes hasta 1974.

36. Algunos nombres podrían citarse a título de sustento, ellos son, entre otros, los generales Ayerbe Chaux, Calderón Molano, Camacho Leyva (Alberto), Currea Cubides, Fajardo Pinzón, Gutiérrez Ospina, Herrera Calderón, Mejía Valenzuela, Ospina Navia, Rincón Puentes, Rubiano Groot, Sánchez O'Donohue, Valencia Tovar, y los almirantes Parra Ramirez y Piedrahita Arango.

Defensa colombiano. La cifra tampoco incluye a los militares que obtuvieron instrucción gracias a su participación en la guerra de Corea, ni a los oficiales de policía. De hecho, no pocos miembros de las Fuerzas Militares recibían instrucción directa en Colombia. A diciembre de 1966, el informe rendido por Edwin Lieuwen al Senado de Estados Unidos menciona 34 oficiales americanos asignados a misiones militares en Colombia. La cantidad sólo es superada por Brasil, en donde se encuentran 53 oficiales, y por Venezuela, quien cuenta con 36. Pero, para observar la magnitud de las cifras arriba calculadas, debe tenerse en cuenta que el número total de efectivos de las Fuerzas Militares de Colombia, hasta 1968, no fue más allá de 50.000 unidades.

Igualmente significativo resulta el examen a las posiciones claves que en el ejército y el gobierno colombianos, durante el Frente Nacional, ocuparon los oficiales que se formaron y/o desempeñaron funciones previas en Estados Unidos. Entre aquellos que estuvieron en Corea, uno fue ministro de defensa, otro fue comandante del Ejército, dos lo fueron de la Marina, dos llegaron a ser jefes del Estado Mayor Conjunto, diecisiete comandantes de Brigada, dos fueron directores de la Escuela Militar y uno de la Escuela Naval³⁵.

Un destino similar siguió la mayoría de los oficiales colombianos destinados en Misiones a Estados Unidos. Varios de los asignados a la Junta Interamericana de Defensa o adjuntos a la Embajada Colombiana en Washington, por ejemplo, pasaron luego por el Ministerio de Defensa, por el Comando del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, por el Estado Mayor Conjunto, por la Dirección de la Escuela Superior de Guerra, o incluso de la Industria Militar. En la práctica, de la

37. Alberto Lleras. *Sus mejores páginas*. Lima: Editora Latinoamericana, 20. Festival del libro colombiano, Biblioteca Básica de Cultura, s.f.c., pp. 213-214. Discurso pronunciado en el Teatro Patria, ante oficiales de la Guarnición de Bogotá.

38. Un ejemplo importante del papel de los militares y de sus límites lo constituye el «Plan Lazo» elaborado por el General Alberto Ruíz Novoa, cuyos avatares se enuncian en diversas fuentes bibliográficas como «*El oficio de la guerra*», de Francisco Leal, o el artículo «*El ejército en Colombia. Historia y actualidad*», de Adolfo Atehortúa. Igualmente ilustrativo fue sucedido? con los generales Guillermo Pinzón Caicedo en 1969, Alvaro Valencia Tovar

Partido Comunista y estudiantes universitarios avanzaron con sus pancartas hasta las proximidades del recinto en que se efectuaba la reunión. Nadie lo impidió. La policía, que pudo disolver el acto cuando recién iniciaba, se limitó a observarlo. El eco de los gritos era escuchado por los asistentes a la reunión interamericana. Cuando Lleras Camargo tomó la palabra, indicó a los representantes de Estados Unidos que afuera se hallaban las razones por las cuales Latinoamérica necesitaba la ayuda externa. De lo contrario, esas razones que gritaban afuera podrían llegar a gritar adentro, como en Cuba: «América Latina está al borde de una crisis económica y social sin precedentes en su historia». Entonces nació la «Alianza para el Progreso»³⁹. ¿Se necesitaba un ejemplo «en vivo y en directo»?

En 1965, una docena de guerrilleros asaltó el pequeño municipio de Simacota y declaró fundado al Ejército de Liberación Nacional, ELN. La prensa no pudo precisar el número de guerrilleros. Algunos medios hablaron de «cien» y otros de «doscientos». La información del ejército se refirió a «más de un centenar». Los insurgentes quedaron convencidos de que su acción había sido de tal magnitud que el enemigo aterrorizado los multiplicaba por diez. Se creían beneficiarios de una publicidad gratuita y tal vez lo eran. Pero, evocando las informaciones de prensa y las fuentes militares, el Congreso norteamericano incrementó al año siguiente la ayuda militar. Esta, que había sido aprobada en 1965 por la cantidad de 3.300.000 dólares para el año fiscal de 1966, se aprobó en 1966 por la suma de 7.900.000 dólares para el año fiscal de 1967.

A finales de 1966, una fracción del Partido Comunista declaró fundado al Ejército Popular de Liberación, EPL, en las profundidades montañosas del bajo río Cauca y Alto río

y José Joaquín Matallana en 1977.

39. El incidente es relatado, entre otros autores, por: Robert Drexler. *Colombia and the United States narcotics traffic and failed foreign policy*. North Carolina: Mac Farland, 1997. Ver, igualmente, Stephen J. Randall. *Aliados y distantes*. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo-Ediciones Uniandes, 1992. pp. 276 y ss.

40. Cf. Willy Muri. *Op. cit.* p. 457.

cia de los civiles lo que facilitó el nuevo papel de las Fuerzas Armadas, con el único límite de que sus actos no amenazarán el *statu-quo* del gobierno en manos de los civiles, o las estrategias electorales partidistas³⁸.

el peso de los militares

No pocas afirmaciones sin riguroso examen han persistido en la literatura histórica con relación al Frente Nacional. Usualmente, el período es señalado como un régimen cerrado y altamente represivo en donde las Fuerzas Armadas jugaron un papel básico a través del permanente Estado de Sitio. Este último se cita incluso como expediente para demostrar el auge de la autonomía militar en materia de orden público, o como mecanismo preferido para la introducción de elementos constitutivos de la célebre «Doctrina de Seguridad Nacional».

Algunos de los argumentos no parecen discutibles. Es evidente que el Estado de Sitio benefició el poder de los militares. En concreto, por ejemplo, los civiles quedaban a disposición de la justicia castrense gracias a las normas de excepción. Sin embargo, las relaciones que giran alrededor del Estado de Sitio son mucho más complejas.

En efecto, podría pensarse que la declaratoria del Estado de Sitio obedece en proporción directa al nivel de los movimientos sociales o a la lucha guerrillera. Sería la respuesta defensiva automática de un régimen en peligro y, al mismo tiempo, el instrumento de represión imprescindible. No obstante, otras circunstancias dan lugar a otro tipo de interpretaciones.

En 1960, representantes de los gobiernos del continente se reunieron en Bogotá para recibir el lanzamiento de un fondo especial para el desarrollo social interamericano, recién aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Simpatizantes del

41. Cf. Daniel Pécaut. *Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988*. Bogotá: Siglo XXI editores, 1989, pp. 46 y 47.

Quizás una mejor idea acerca del peso real de los militares en el sistema político y en la sociedad colombianas se obtiene al comparar algunas de sus estadísticas con las de sus congéneres en América Latina. La página siguiente nos ofrece, a título de información, un cuadro general comparativo de las Fuerzas Militares de algunos países latinoamericanos en relación con el número de sus efectivos, proporción con respecto a la población, superficie, y porcentaje con el PIB de cada país. Las cifras se han agrupado en promedios quinquenales entre 1969 y 1999, para facilitar su lectura.

Cuadro No. 4
Cuadro comparativo de las Fuerzas Militares
de algunos países latinoamericanos
Número de efectivos en miles, proporción
con respecto a población, superficie y
gastos militares/porcentaje PIB
Promedios Quinquenales 1969-1999

Período	País	Total Fuerzas Militares	Proporción con respecto a la población	Proporción con respecto a la superficie	Gastos Militares en % PIB
1969-1974	Argentina	133.8	177	20.6	2.28
	Brasil	197.9	451	43.0	2.62
	Chile	58.1	170	13.0	2.62
	Colombia	63.5	312	17.9	1.56
	Ecuador	20.3	280	13.8	2.00
	El Salvador	5.6	573	3.7	1.20
	México	69.9	679	28.1	0.75
	Nicaragua	7.1	255	18.1	1.60
	Perú	52.6	243	24.4	3.20
	Venezuela	30.5	317	29.9	2.20
1975-1979	Argentina	135.5	176	20.3	2.00
	Brasil	251.3	393	33.8	1.45
	Chile	75.9	132	9.9	12.7
	Colombia	64.8	347	17.6	0.95
	Ecuador	-	-	-	-
	El Salvador	-	-	-	-
	México	-	-	-	0.70
	Nicaragua	-	-	-	-
	Perú	67.2	202	19.1	2.80
	Venezuela	-	-	-	-

Sinú. Un periodista extranjero, amigo de la insurgencia, visitó sus campamentos y habló de las «zonas liberadas», «bases de apoyo» y «juntas patrióticas de liberación» encabezadas por el viejo guerrillero liberal Julio Guerra. El acto de bautizo no fue, esa vez, la toma de un municipio. Eran sólo diez hombres. Pero el hecho, sumado a las noticias sobre la posible presencia del Che Guevara en Suramérica, elevó la ayuda militar norteamericana a 12.200.000 dólares en 1968. La publicidad magnificada con exageración por la guerrilla, reproducida por la prensa y citada por los gobiernos, hizo el mejor «lobby» en los estrados senatoriales norteamericanos.

Sin embargo, las circunstancias ofrecen otras connotaciones. El salario de los militares en Colombia era uno de los más bajos en toda Suramérica. Consciente de ello, la élite civil del Frente Nacional concedió incrementos extraordinarios a través de decretos excepcionales en 1963, 1968, 1970 y 1974. Pero, lo más importante es que al salario básico de todo militar se le agregaban primas especiales de servicios y actividad, relacionadas con la declaratoria del Estado de Sitio, cuya duración también contaba como «tiempo extra» para efectos pensionales y de jubilación⁴⁰.

De todas maneras, no eran tampoco los únicos beneficiados con la declaratoria del Estado de Sitio. En la Constitución Nacional de la época, el Congreso de la República sesionaba sólo durante un corto período del año, por lo cual y sólo en su transcurso, recibía ingresos salariales. Con motivo del Estado de Sitio, el Parlamento se declaraba en sesión permanente y, por ende, dichos estipendios salariales podían recibirse durante todo el año. El propio presidente Carlos Lleras acusó en 1966 al Congreso de intentar mantener el Estado de Sitio, en forma deliberada, para obtener ventajas financieras⁴¹.

el tamaño de las fuerzas militares

1980-1984	Argentina	169.2	160	16.9	8.10
	Brasil	275.1	411	30.9	0.70
	Chile	91.6	116	8.2	4.60
	Colombia	68.2	365	16.7	1.00
	Ecuador	-	-	-	-
	El Salvador	16.9	284	1.2	3.80
	México	113.2	571	17.2	0.60
	Nicaragua	40.7	57	3.1	-
	Perú	117.7	139	10.9	2.00
	Venezuela	40.9	311	22.2	1.70
1985-1989	Argentina	101.4	292	27.2	4.20
	Brasil	289.6	458	29.3	0.62
	Chile	98.6	114	7.6	7.35
	Colombia	71.7	373	15.9	1.02
	Ecuador	39.3	204	7.1	2.30
	El Salvador	42.8	119	0.5	4.35
	México	134.0	570	14.6	0.50
	Nicaragua	72.3	39	1.7	9.82
	Perú	123.7	155	10.3	6.48
	Venezuela	48.0	347	19.0	1.72
1990-1994	Argentina	78.4	414	35.1	1.84
	Brasil	307.6	498	27.6	0.52
	Chile	94.4	142	8.0	3.28
	Colombia	135.8	247	8.4	2.06
	Ecuador	49.3	225	5.7	-
	El Salvador	40.9	132	0.5	3.04
	México	163.0	504	12.0	0.37
	Nicaragua	40.7	98	3.1	8.90
	Perú	114.4	200	11.2	3.17
	Venezuela	51.5	383	17.7	2.42
1995-1999	Argentina	71.0	499	38.8	1.80
	Brasil	310.8	514	27.3	1.74
	Chile	94.0	155	8.0	3.44
	Colombia	146.4	247	7.7	2.58
	Ecuador	57.2	209	4.9	3.46
	El Salvador	28.5	199	0.7	2.00
	México	175.0	539	11.1	0.78
	Nicaragua	15.9	291	8.1	2.40
	Perú	121.0	201	10.6	1.78
	Venezuela	56.0	407	16.2	1.48

Para una mejor ilustración, resulta pertinente comparar los datos de los cinco países suramericanos que más ayuda militar han recibido de Estados Unidos en los últimos años: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Es claro, por ejemplo, que hasta 1989 Colombia tenía la más baja cantidad de efectivos en las filas militares. Sólo en el quinquenio siguiente, 1990-1994, Colombia asciende al segundo lugar,

gracias al descenso de Argentina, luego de las dictaduras y de la «Guerra de Las Malvinas».

Las cifras, sin embargo, resultan más significativas cuando se relaciona la cantidad de efectivos con la población y la superficie de cada país. En este sentido, Brasil, que figura como el país suramericano con la más elevada cantidad de tropas, aparece con el menor número de soldados en relación con la población civil. Hasta 1989, hay en Brasil un soldado por cada 458 habitantes. Hasta esa misma fecha, Colombia posee un soldado por cada 373 habitantes y es el segundo país con la proporción más baja. Sin embargo, esta proporción varía en los siguientes quinquenios cuando, debido al incremento de tropas, Colombia posee un soldado por cada 247 habitantes. Cifra con la cual, a pesar de todo, no logra superar a Perú ni menos a Chile, quien ha mantenido la proporción más alta en todo el período: por cada ciento setenta habitantes tiene un soldado en el período 1969-1974; llega a tener un soldado por cada 115 habitantes en la década de los ochenta, pero desciende entre 1995 y 1999 a una relación de un soldado por cada 155 habitantes.

Por otra parte, la comparación señala a Brasil como el país con menor cantidad de soldados en relación con su superficie. En el quinquenio 1969-1974, Brasil posee un soldado por cada veinte kilómetros cuadrados. La posición de Colombia, hasta 1989, es superada por Chile y Perú. Pero, una vez más, Colombia disminuye la proporción en los últimos años y se coloca, incluso, al lado de Chile. Mientras en el quinquenio 1969-1974, Colombia tenía un soldado para 18 kilómetros cuadrados, en décadas más recientes alcanza a poseer un soldado por casi cada ocho kilómetros cuadrados.

Sin embargo, otra comparación es más reveladora. Hasta 1980, Colombia fue el país con el gasto militar más bajo en relación con el producto interno bruto. Hasta 1989, esta posición la disputa con Brasil, pero pasa a ser, junto con Chile, el país cuyo gasto militar posee mayor incidencia en el PIB, a partir del quinquenio 1995-1999. Chile, a su vez,

presenta un enorme gasto en relación con su PIB en la década de los setenta que, aunque desciende en los ochenta, continúa como el más alto del área suramericana, en tanto Brasil, por el contrario, ocupa la incidencia más baja de su gasto militar sobre el producto nacional bruto.

En síntesis, hasta 1980, período que cobija al Frente Nacional, Colombia posee una de las Fuerzas Militares más débiles del continente: pocos efectivos, baja relación de éstos con la población y la superficie, y escasa incidencia del gasto militar en relación con el PIB. A partir de 1985, pero con mayor fuerza, a partir de 1989, dicha situación varía: Colombia incrementa su cantidad de efectivos y ello influye sobre la proporción con respecto a la población, la superficie y el PIB. Pero, a pesar de todo, sus niveles continúan siendo inferiores a los presentados por Perú y Chile. Durante todos los quinquenios aquí registrados, Chile aparece, por el contrario, como el país con mayor número de efectivos en proporción con la población, la superficie y el PIB. Brasil, quien posee la mayor cantidad de militares entre todos los países suramericanos, tiene los más bajos índices proporcionales en relación con su población, la superficie y el PIB.

a modo de conclusiones

Este ensayo intentó mostrar cómo el proceso histórico de construcción y formación de las Fuerzas Militares en Colombia se encuentra ligado al devenir del Estado Nacional y de la sociedad. Si hacemos referencia a la primera mitad del siglo XX, su estudio resulta paralelo, por tal motivo, al estudio de los grandes episodios de nuestra historia, desde La Regeneración, hasta la muerte de Gaitán y la Violencia, pasando por la Hegemonía Conservadora y la República Liberal.

Las Fuerzas Militares y el Ejército de Colombia, en particular, han presentado diversos avatares en su proceso de profesionalización. En el primer período de su formación, limitantes y contradicciones de diversa índole convierten a las Fuerzas Armadas en cuerpos relativamente débiles cuya representa-

tividad en términos de poder se adscribe a la orientación y decisión de los partidos.

A raíz del 9 de abril, las Fuerzas Armadas asumen una función política permitida y estimulada por los civiles. Sin embargo, son éstos últimos quienes conceden a los militares un nuevo rol en su naturaleza y funciones, sin permitir su total independencia. La conducción del Ministerio de Defensa, el control del orden público regional y nacional, la aplicación de justicia frente a civiles acusados de rebelión, son algunas atribuciones que, por vía del Estado de Sitio, se suman regularmente para facilitar su relativa autonomía en el manejo del orden interno.

No obstante, el poder de las Fuerzas Militares es limitado. No sobrepasa la voluntad de las élites civiles. El mismo golpe de Estado encabezado por el General Rojas Pinilla debe observarse como lo que fue: la decisión de fuertes grupos partidistas que encontraron en el Ejército la alternativa frente a una violencia que se salía de cauce y tocaba en lo profundo la crisis del Estado. Grupo civil que, tras el cambio de las circunstancias, no encontró tampoco resistencia en el propio General Rojas para designar la junta que habría de sucederle implantando el Frente Nacional.

A diferencia de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador o Perú, los militares ingresaron a la nación sin conceptualización orgánica, sin identidad, sin un programa propio, sin una filosofía de oposición a los civiles; traídos de la mano por los partidos existentes. Por esa razón, en el Ejército colombiano no existió nunca la posibilidad de un Velasco Alvarado o de un Omar Torrijos. El más cercano parecido a Perón, el General Gustavo Rojas Pinilla, fue inmediatamente neutralizado por los civiles, como separados de las armas fueron Ruiz Novoa, Pinzón Caicedo, Valencia Tovar, Puyana, Matallana y Landazábal, por atreverse a cuestionar la gestión o decisión de los civiles. No hubo un Luis Carlos Prestes, pero tampoco un Pinochet o Stroessner.

Tras la caída de Rojas y el advenimiento de la reconciliación política en los términos del nuevo acuerdo bipartidista, las

Fuerzas Militares ingresaron sin reclamos al régimen que los colombianos fundaron con el plebiscito de 1957. Ahora, como quiera que el Frente Nacional hizo inocuas las diferencias entre liberales y conservadores, la distinción partidista se borró también de las Fuerzas Militares. Entonces, las circunstancias propiciaron su transformación: las Fuerzas Armadas se convirtieron en los pilares del nuevo régimen. Les fue entregada la responsabilidad de velar por el orden público interno, con relativa autonomía, mientras la élite civil se ocupaba de los componentes generales del régimen. Una realidad que, sin embargo, merece estudios y meditaciones más profundos.